

Los nuevos rostros de la derecha en América Latina

Desafíos conceptuales y estudios de caso



Andrea Bolcatto · Gastón Souroujon
compiladores

UNIVERSIDAD
NACIONAL DEL LITORAL



Los nuevos rostros de la derecha en América Latina

Desafíos conceptuales y estudios de caso

Andrea Bolcatto • Gastón Souroujon
(Compiladores)

Mariana Berdondini • Andrea Bolcatto • Esteban Iglesias • Esteban Kaipl • Bruno Könder Comparato • Cecilia Lesgart • Sacha Lione • Juan Bautista Lucca • Marina Martínez • Sergio Daniel Morresi • Alejandro Pelfini • Gastón Souroujon • Christiane Vieira Laidler



COLECCIÓN
CIENCIA Y TECNOLOGÍA



**UNIVERSIDAD
NACIONAL
DEL LITORAL**

Rector **Enrique Mammarella**

Secretario de Planeamiento Institucional y Académico **Miguel Irigoyen**

Decana Facultad de Humanidades y Ciencias **Laura Tarabella**

.....
Bolcatto Andrea; Souroujon Gastón
Los nuevos rostros de la derecha
en América Latina: desafíos conceptuales
y estudios de caso / Andrea Bolcatto...
[et al.] ; compilado por Andrea Bolcatto;
Gastón Souroujon. - 1a ed. - Santa Fe:
Ediciones UNL, 2020.
Libro digital, PDF - (Ciencia y tecnología)

Archivo Digital: descarga y online
ISBN 978-987-749-269-9

1. Política. 2. Política Latinoamericana.
3. Partidos Políticos. I. Bolcatto, Andrea, comp.
II. Souroujon, Gastón, comp.
CDD 320.0980
.....

© Mariana Berdondini, Andrea Bolcatto,
Esteban Iglesias, Esteban Kaipl, Bruno Könder
Comparato, Cecilia Lesgart, Sacha Lione, Juan
Bautista Lucca, Marina Martínez, Sergio Daniel
Morresi, Alejandro Pelfini, Gastón Souroujon,
Christiane Vieira Laidler, 2020.

© ediciones  UNL, 2020.

Consejo Asesor
Colección Ciencia y Tecnología
Graciela Barranco
Ana María Canal
Miguel Irigoyen
Luis Quevedo
Gustavo Ribero
Ivana Tosti
Alejandro R. Trombert

Directora Ediciones UNL
Ivana Tosti
Coordinación editorial
María Alejandra Sedrán
Coordinación diseño
Alina Hill
Diagramación de interior
Gustavo Caraballo
Diagramación de Tapa
Gustavo Caraballo

—
editorial@unl.edu.ar
www.unl.edu.ar/editorial



La derecha conservadora y las acciones colectivas en el siglo XXI sudamericano

Juan Bautista Lucca y Esteban Iglesias

Introducción

*And so tonight —to you, the great silent majority
of my fellow Americans— I ask for your support.*

Richard Nixon, discurso, 3 de noviembre de 1969

Durante el siglo XXI, América Latina está experimentando una formidable transformación política. A excepción de algunos países como Colombia, Perú y Chile, en la primera década del siglo XXI, la región experimentó la llegada al gobierno de fuerzas partidarias ubicadas a la izquierda y centro izquierda del espectro político configurando lo que se conoció como «giro a la izquierda» (Stoessel, 2014; Peixoto de Oliveira, 2019:18). Sin embargo, en la segunda década, cuando se pone en crisis el «Consenso de las *Comodities*», las fuerzas políticas de la «marea rosa» se ven tensionadas —cuando no relegadas o desplazadas— por fuerzas políticas con vocación mayoritarias que se inscriben en el ideario de derecha, algunas veces vinculadas a formaciones sempiternas como el Partido Colorado en Paraguay, el Partido Nacional en Uruguay o la UCR en Argentina por un lado, o a expresiones de reciente formación como el PSL en Brasil, el FCN en Guatemala, el PRO en Argentina o Cabildo Abierto en Uruguay por el otro, por mencionar algunos ejemplos (Soler, Giordano y Saferstein, 2018:173).

Más allá de su exigua o extensa trayectoria histórica, todas estas organizaciones traen aparejada la singularidad de identificarse como promotores de un «cambio» en la sociedad —principio inicialmente asociado a la izquierda y su ideario revolucionario—, aunque en esta oportunidad entendido como una «retro-evolución», como una búsqueda por recuperar las jerarquías, tradiciones, valores y la seguridad política y ontológica que el giro a la izquierda había puesto en entredicho al aumentar las condiciones materiales y simbólicas de la igualdad (Lucca, Benetti e Iglesias, 2017; Amselle, 2010).

Independientemente de su incursión en los lindes de la democracia liberal electoral, una de las características singulares de este *ritornello* latinoamericano de derecha en el siglo XXI radica en haber abandonado su fisonomía de «mayoría silenciosa» que intervenía en la política a través de grupos de interés, medios de comunicación, la iglesia, las fuerzas armadas o eventualmente a través de partidos conservadores, para arroparse con aquello que, desde fina-

les de los años 1960, parecía un dominio prioritario de las fuerzas progresistas, izquierdistas o nacional populares: la acción colectiva en el espacio público (Traverso, 2018:46; Blee y Creasap, 2010:271).

Este singular fenómeno pone en tensión a las perspectivas teóricas sobre la acción colectiva surgidas a mediados de los sesenta del siglo xx que se configuraron en torno al interrogante ¿qué sujetos sociales pueden constituirse en sujetos políticos con el propósito de difuminar el principio de la igualdad? (Iglesias, 2008; Lucca, 2012). Ello obedece a que los movimientos sociales constituían los sujetos políticos del cambio en sociedades donde supuestamente la demanda por mayor distribución de la riqueza se encontraba «institucionalizada». Sin embargo, en las últimas décadas es recurrente observar movilizaciones sociales antiigualitarias y en contra de principios articuladores de la democracia, como el pluralismo y el respeto por la soberanía popular (Pichardo, 1997:426).

Ante estas nuevas condiciones políticas, resulta pertinente entender las movilizaciones en términos de «formas de coordinación de la acción colectiva» (Diani, 2015:21) y no en términos de movimientos sociales. Esto implica alejarse de una mirada normativa y circunscrita a las fuerzas de izquierda, en el que las movilizaciones sociales eran articuladores en pos de la «igualdad», para incorporar —y problematizar— otras acciones colectivas poco estudiadas, pero de gran actualidad, en las que la nueva derecha latinoamericana encuentra un fuerte asidero, como son aquellas que defienden: la homogeneidad —de la nación, Estado, etc.— en vez del pluralismo o multiculturalismo; la identidad religiosa y la constitución familiar en contra del aborto, el matrimonio gay y la educación sexual; la propiedad privada y la propia vida, frente al Estado y la anomia, entre otras.

Ahora bien, así como la literatura comparada se encargó de repensar la heterogeneidad de casos, vertientes y derroteros dentro del «giro a la izquierda latinoamericano», es necesario reconocer a qué tipo de derecha hacemos referencia en este artículo. En primer lugar, a aquellas fuerzas políticas que parten de una noción de desigualdad producto de las diferencias de talento natural o esfuerzo individual, y no producto de un accionar sociohistórico (Bobbio, 1994); en segundo lugar, a expresiones de derecha que recuperan la importancia de la tradición, las costumbres, la religión y el patriotismo como fuentes de autoridad y jerarquía (Hobsbawn, 1994:97–98); y, en tercer lugar, a expresiones de derecha que en su accionar colectivo conjugan un ideario anti individualista por un lado, con un carácter reactivo o defensivo de un *status quo ante* en términos morales que se encuentra agraviado y desdibujado por el universalismo y el progresismo, por el otro (VonBeyme, 1985:8 y 24; Giddens, 1994:37 y 47; Romero, 1970:30). En resumidas cuentas, hacemos referencia a la acción colectiva que llevan adelante expresiones conservadoras de derecha

en América Latina durante el siglo XXI, en tanto y en cuanto se rebelan contra el giro a la izquierda y sus orientaciones de política pública que ponen fin a su situación de privilegio moral, jerarquía social y estratificación económica. A tal fin, habremos de focalizarnos en la acción colectiva anclada en el pensamiento conservador de derecha ante los intentos recaudatorios del Estado y la inseguridad como puesta en entredicho de la propiedad individual como ejemplos centrales de este nuevo activismo sociopolítico.

Acción Colectiva en defensa de la propiedad: «los ricos también protestan»

*La razón por la que los hombres entran
en la sociedad es para preservar su propiedad.*

John Locke

Observar empíricamente la (des)igualdad en las sociedades contemporáneas es una tarea arduo compleja cuando no inasible; sin embargo, a los fines ilustrativos para sustentar el argumento de este escrito, es posible aseverar que en la gran mayoría de los países de América del Sur, a una década de deterioro de las condiciones económicas y materiales de la igualdad a finales del siglo XX, le siguió en la primera década del siglo XXI un crecimiento de la economía, una recuperación en la distribución del ingreso entre individuos y hogares, pero también una mejor recaudación impositiva en términos generales, inclusive en los impuestos sobre las rentas, utilidades y ganancias de capital (Jiménez, 2017:63–64).

Independientemente de las asimetrías e inequidades del sistema tributario, los niveles de evasión, la incidencia real del cobro de impuestos y crecimiento de la economía en la redistribución y la igualdad social, el argumento a señalar aquí apunta a que durante las dos primeras décadas del siglo XXI en América del Sur, se extendió una percepción generalizada, por un lado, de crecimiento económico y mayor generación de riquezas, que se dio, por el otro, junto a un crecimiento de las capacidades e injerencia estatal para recaudar, redistribuir y articular enclaves particularistas. Esta situación fue la piedra de toque para que sectores sociales con altos ingresos y, en contrapartida, mayor presión tributaria, se articularan y movilizaran colectivamente en defensa del «agravio» que suponía la «presión estatal» sobre su propiedad.

Habitualmente, los sectores de mayores ingresos, en adelante «los ricos» según el estándar de la sociedad para simplificar, han sido reacios a la acción colectiva, en parte porque disponen de otros recursos, actores y vías para la

manifestación de su descontento, pero también porque desconocen el terreno de la movilización callejera, sus estrategias, repertorios y modalidades. Sin embargo, aunque poco habituales, los ricos también se manifiestan, especialmente cuando se conjugan: una interpretación de que sus privilegios o status pueden verse afectados inminentemente por una nueva política pública; cuando el poder político de turno encarna el rol del principal antagonista; cuando una pléthora multiforme de otros actores y personalidades sirven de base y fundamento para promover el ingreso en una arena de activación pública en la que desconocen cómo desempeñarse; y cuando existe de fondo una lectura de la situación en la que movilizarse efectivamente «hace la diferencia», es una «oportunidad», especialmente frente a la obturación de otros medios y canales para desafiar la autoridad (Martin, 2013:10–11; McVeigh, 2009:38–43).

América del Sur: «¿Es justa la distribución del ingreso?» (en porcentaje)												
	1997	2001	2002	2007	2009	2010	2011	2013	2015	2016	2017	2018
Muy justa	3	2	2	3	2	2	2	3	2	2	2	1
Justa	9	7	9	16	19	19	19	23	21	17	16	14
Injusta	51	49	51	49	52	51	54	44	47	48	49	50
Muy injusta	34	38	34	28	23	23	22	25	26	30	29	31
No sabe	2	3	3	3	4	4	3	4	5	3	3	3
No contesta	1	1	1	1	1	1	0	1	1	0	1	1
(N)	10611	10875	11249	12004	12004	12004	12004	12004	12050	12004	12001	12004

Figura 1. América del Sur: «¿Es justa la distribución del ingreso?» (en porcentaje).
Fuente: Latinobarómetro <http://www.latinobarometro.org/latOnline.jsp>.
Consultado: 15/10/2019

Tomando como punto de partida este argumento, es posible observar a continuación cómo la acción colectiva de sectores de mayores ingresos en defensa del status quo en relación con la propiedad privada, fue una situación recurrente y exponencialmente evidente en el cono sur durante el siglo XXI, especialmente en aquellos países donde el «giro a la izquierda» buscó modificar las condiciones materiales de la histórica desigualdad económica.

Argentina (2008)

El 10 de marzo de 2008, el Ministerio de Economía del gobierno de Cristina Fernández, propuso aumentar el monto a pagar como derechos de exportación particularmente a la soja, el maíz y el trigo a través de la resolución 125/2008.

Con una economía en expansión producto del valor de estas *commodities*, el aumento del denominado «impuesto al campo» fue decodificado por aquellos afectados por el gravamen como un avance estatal en la ganancia y esfuerzo privado vinculada a la producción de oleaginosas.

Durante 129 días, los sectores patronales, sindicales y campesinos vinculados al trabajo agropecuario, como también un sinnúmero de actores sociales y políticos enconados con el gobierno nacional, llevaron adelante un sinnúmero de intervenciones y movilizaciones en los espacios públicos en pos de retrotraer el gravamen y criticar la orientación estatal recaudatoria. Así, lo que comenzó como un reclamo sectorial, derivó en un cisma social y político que configuró dos subculturas políticas presentes incluso 10 años después.

En este contexto, la «Mesa de Enlace» formada por la Federación Agraria Argentina (FAA), la Sociedad Rural Argentina (SRA), la Confederación Rural Argentina (CRA), la Confederación Intercooperativa Agropecuaria Cooperativa Limitada (CONINAGRO), entre otras entidades, fue una inédita e histórica construcción política en la que se aglutinaba a los pequeños productores agropecuarios con un histórico aprendizaje de movilización social, junto a actores y corporaciones más grandes y poderosos con una histórica intervención en la esfera pública como grupo de presión e interés antes que por su fuerza a través de la movilización social.

Durante cuatro meses, el cierre patronal derivó en cortes de rutas prolongados, movilizaciones sociales de gran envergadura a lo largo del territorio, cacerolazos, quema de pastizales, formación de asambleas ciudadanas, hechos de violencia, e incluso problemas de desabastecimiento. Estos «piquetes de la abundancia», en palabras de la presidenta Cristina Fernández, lograron que el reclamo de la Mesa de Enlace por defender su posición de privilegio económico, fuera apoyada por toda la oposición política y social enojada con el gobierno kirchnerista.

La resolución del conflicto fue claramente un traspie para el gobierno, que no solo sufrió la renuncia del ministro de Economía (Martín Lousteau), el voto «no positivo» del vicepresidente Julio Cobos en el debate parlamentario de la medida, y la galvanización de una oposición hasta entonces desperdiciada; pero también, la evidencia de que «los ricos también protestan» e incluso, parafraseando a la presidenta Fernández, son capaces de armar un partido y ganar elecciones, como las de 2015 a manos de Mauricio Macri y los sectores de la economía agropecuaria (Iglesias, 2013; Retamozo y Di Bastiano, 2018).

Bolivia (2008)

Entre septiembre y octubre de 2008, los «autonomistas» tomaron instalaciones y edificios del gobierno nacional, bloquearon rutas y amenazaron con interrumpir el suministro de gas a Brasil y Argentina en caso en que no se atendieran sus reclamos. El conflicto político entre los prefectos de la «Media Luna» boliviana y el gobierno nacional encabezado por el MAS fue, sin lugar a dudas, de los más agudos de todos los años que ha gobernado Evo Morales, desde 2005.

Cabe señalar que la victoria de Evo Morales y el MAS, en el año 2005, modificó las condiciones en que se desarrollaban las correlaciones de fuerzas con los departamentos–gubernaturas. Los principales vectores que orientaban y definían el gobierno de Evo Morales —nacionalismo e indigenismo— (Mayorga, 2018) se encontraban en las antípodas políticas, económicas y culturales de los territorios de Santa Cruz, Tarija, Beni y Pando (la «Media Luna»).

Por ende, la contracara del triunfo del MAS fue la galvanización del descontento y la formación del Comité Cívico Pro Santa Cruz, que se articuló bajo la bandera de la «autonomía». Como sostiene Felipe Burbano de Lara:

A través del Comité, los mismos empresarios asumen el rol de dirigencia política del departamento. También en el departamento de Santa Cruz, como en otros de Bolivia, el Comité funciona como vertebrador del movimiento regional, es decir, como la instancia desde donde se levanta la reivindicación regional y en donde se procesa el conflicto con el Estado. (Burbano de Lara, 2009:303)

Lo que estaba de fondo en el plano económico, era la disputa por los ingresos de la renta de los hidrocarburos y de la producción agropecuaria que se generaban principalmente en esta región, que el gobierno central de Morales había gravado a través de la Renta Dignidad para destinarlo al pago de pensiones (Acosta, 2009). Durante los meses de agosto y septiembre, los prefectos de la oposición convocaron a movilizarse con un discurso secesionista, lo cual derivó en el bloqueo de las rutas, la ocupación las instalaciones de los gobiernos nacionales, e incluso una escalada de violencia de relevancia para la región que buscaba desestabilizar a un Morales que había puesto su cargo a ratificación, obteniendo el 67,4 % de aprobación en el mes de agosto de 2008 (Rojas Ríos, 2015).

La salida a este conflicto se dio a través del enjuiciamiento y detención del prefecto de Pando (Leopoldo Fernández) por la Masacre de Porvenir, pero también a través del debate de una nueva constitución que reconoce de manera relativa la autonomía regional, el establecimiento de una nueva ley de Autonomías y Descentralizaciones, y un intento denodado del gobierno de Morales por «enamorar

a Santa Cruz» en tanto uno de los principales motores económicos y distritos electorales del país, a través de promesas de crecimiento y estabilidad económica.

Brasil (2013)

En junio de 2013 cobró forma una crisis política en Brasil que derivó en la debacle del Partido de los Trabajadores (PT) y catapultó a Jair Bolsonaro a la presidencia de la nación en las elecciones de 2018. Las protestas durante el 2013, impulsadas por el movimiento de jóvenes universitarios por una disminución de la tarifa del transporte público, terminaron siendo capitalizadas por grupos contrapuestos ideológicamente y conformados por sectores medios y medios altos, que denunciaban gastos suntuosos la corrupción y la especulación inmobiliaria que el gobierno del PT había dado pie con la organización de la Copa de las Confederaciones y la Copa del Mundial de Fútbol de 2014 (Rocca Rivarola, 2019).

Lo que se inició como una protesta protagonizada por fuerzas políticas de izquierda, descontentas con el gobierno, con expresiones como movimiento Pase Libre, la unión de Estudiantes Secundarios y Black Blocs, que incumbía a una nueva clase trabajadora que batallaba día a día para su supervivencia, derivó en la presencia pública-política de expresiones de contrario signo ideológico, como Movimiento Brasil Livre, por VemPraRua, Anonimus, entre otros (Singer, 2018; Amaral, 2016). Si se toma como ejemplo los datos de DataFolha que analizan quienes participaron y apoyaron la protesta del 15 de marzo de 2013 en la ciudad de San Pablo, es posible señalar que estos fueron: principalmente los hombres (63 %), de entre 26 a 50 años (65 %), de piel blanca (68 %), mayoritariamente con un ingreso de 1500 dólares por mes (80 %).

En definitiva, esta composición se condice en gran medida con la clase media tradicional brasilera, que portaba una fuerte impronta conservadora y un claro discurso antipetista. Frente a una histórica tradición de movilización de los sectores populares, estudiantiles y provenientes del mundo del trabajo, la irrupción en las calles de la «elite del atraso» durante el 2013 a 2015, muestra claramente cómo y porqué quienes más poseen salieron a protestar en Brasil (Tatagiba y Galvao, 2019:91–92; Souza, 2018:212).¹

1 Ver: Clarín, «Los más ricos son quienes más apoyan las protestas en Brasil, según un sondeo», disponible en: https://www.clarin.com/mundo/ricos-apoyan-protestas-Brasil-sondeo_0_HJlzVpfjPXe.html. Consultado el 15/10/2019. DataFolha, «47 % foram a avenida paulista em 15 de março a protestar contra a corrupção», disponible en: <http://datafolha.folha.uol.com.br/opiniaopublica/2015/03/1604284-47-foram-a-avenida-paulista-em-15-de-marco-protestar-contra-a-corrupcao.shtml>. Consultado el 15/10/2019.

Acción Colectiva contra la inseguridad: «seguro vienen por lo mío»

Los peligros de la vida son infinitos, y la seguridad es uno de ellos.

J. W. Von Goethe

La derecha conservadora considera que la intervención del Estado es fundamental para evitar procesos de desintegración de la sociedad, aunque circunscrito a aquellas acciones que ponen el acento en la ley y el orden, ya que estos son los puntales de la seguridad ontológica y material a los sujetos y las condiciones de funcionamiento del mercado (Giddens, 1998:48; Hayek, 2007:157–159). Pero, en contrapartida, enarbolan (emparentados con las corrientes neoconservadoras y neoliberales) una fuerte crítica hacia los gobiernos estatales que se preocupan por el bienestar social, ya que su (in)acción ha derruido la eficacia, eficiencia y espíritu de las instituciones estatales, especialmente en lo que atañe al Estado de derecho y la justicia (Cerrutti, 2009:17).

Por ende, es habitual que los sectores conservadores pongan fuertemente el acento en la evolución (real o percibida) de los delitos y las penas, y que este aspecto sea un estandarte para la acción colectiva, configurando lo que David Garland (2005:8) conceptualizó como «populismo punitivo»: la percepción de la opinión pública de que con el aumento de las penas se puede disminuir el delito y, azuzados por los medios de comunicación y sectores políticos afines, ocupan el espacio público reivindicando una mayor intervención del aparato estatal —policial y judicial— (Mouzo, 2012 y Galar, 2017).

América del Sur: «Vivir en el país es cada día más seguro o inseguro» (en porcentajes)							
	2003	2007	2008	2009	2010	2011	2015
Más seguro	3	8	13	10	9	7	7
Igual de seguro	24	27	30	32	34	37	29
Más inseguro	54	63	56	57	56	54	63
Muy inseguro	18	0	0	0	0	0	0
No sabe	1	1	1	1	1	1	1
(N)	11400	12004	12004	12004	12004	12004	12050

Figura 2. América del Sur: «Vivir en el país es cada día más seguro o inseguro» (en porcentajes). Fuente: Latinobarómetro <http://www.latinobarometro.org/latOnline.jsp>. Consultado: 15/10/2019

Por ende, en un contexto donde el universalismo pone en tensión múltiples vectores de seguridad ontológica otrora anclados en la tradición, y donde las sociedades del riesgo se tornan más complejas, la acción colectiva defen-

sora del *status quo* de la seguridad tiende a crecer y hacerse visible al grito de «más seguridad de mi propiedad, de lo que es mío».

Argentina (2004)

Las acciones colectivas que demandan mayor seguridad refieren a «...delitos que son percibidos como amenazas sobre los bienes y sobre las personas cuya característica en común es la aleatoriedad, la percepción de que pueden abatirse sobre cualquiera» (Kessler, 2015:272). Esta demanda emerge en Argentina durante la última década del siglo xx que, según Maristella Svampa (2005), tuvo como precedente a la masacre del ingeniero Budge (1987), la muerte de Walter Bulacio (1991), el asesinato de Miguel Bru (1993), el crimen del soldado Omar Carrasco en Zapala (1994) y del fotógrafo José Luis Cabezas (1996). Sin embargo, desde inicios del presente siglo cobra protagonismo político y se reinstala como una de las principales preocupaciones ciudadanas. Así, en abril de 2004 Juan Carlos Blumberg, padre de un joven secuestrado y asesinado en la provincia de Buenos Aires, convocó a una protesta logrando una multitudinaria manifestación frente al Congreso Nacional. El recién electo presidente Néstor Kirchner tuvo una actitud proactiva frente a esta situación y potencial conflicto social facilitándole a Blumberg diversos canales institucionales, por ejemplo: que se encuentre presente en una sesión de Cámara de Diputados, permitiéndole designar, incluso, quién podía tomar la palabra y quién no, algo fuera de protocolo e irregular. Lo cierto fue que, en esta ocasión, Néstor Kirchner sabía que no podía rivalizar ni con Blumberg ni hacer caso omiso de esta problemática. Las reformas exigidas por Blumberg al Código Penal y Procesal se efectuaron a partir de la sanción de seis leyes,² las que endurecieron las penas y el régimen de libertad condicional (Svampa, 2005). A pesar del impacto público, la figura de Blumberg no tuvo futuro político —su candidatura a la gobernación de Buenos Aires obtuvo un 1,3 %—, sin embargo, el problema de la (in)seguridad urbana se instaló definitivamente en la sociedad argentina (Mauro y Rossi, 2012; Kessler, 2010).

Instalada la problemática en la sociedad y en la agenda política, mucho no se avanzó desde la perspectiva de las políticas públicas durante el kirchnerismo.³ Lo cierto fue que sobre el temor a la inseguridad y la victimización el

2 Entre abril y junio de 2008 se sancionaron las leyes 25882, 25886, 25891, 25892, 25893 y 25982.

3 Entre las líneas de acción de mayor relevancia se puede registrar la directiva a las fuerzas de seguridad de no usar armas de fuego en las manifestaciones sociales durante parte del gobierno de Néstor Kirchner la creación del Ministerio de Seguridad en 2010, y los planes de desarme de la ciudadanía.

gobierno encabezado por Mauricio Macri construyó un importante vector de política que irradiaba sobre un conjunto heterogéneo de situaciones, desde la criminalización de la protesta hasta el endurecimiento de penas y la baja de la imputabilidad de las personas.

Uruguay (2011)

Los partidos tradicionales en Uruguay (partido Blanco y Colorado), han tenido una actitud crítica y de oposición acérrima a lo largo del gobierno del Frente Amplio que se inicia en el año 2005. En ese sentido, las temáticas de seguridad ciudadana, no estuvieron exentas en el horizonte de amplios sectores de ambas fuerzas que, encabezados por Pedro Bordaberry (hijo del dictador Juan María Bordaberry), recolectaron aproximadamente el 10 % del padrón total en el año 2011 para iniciar el proceso de consulta a la ciudadanía para reducir la edad de imputabilidad de las penas desde los 18 a los 16 años.

Si bien esto redundaría en una amplia reacción, conocida como el «Movimiento No a la Baja» que logró derrotar a la opción propuesta por Bordaberry (Berri y Pandolfi, 2018), en el año 2014 el «Sí» obtuvo el 47 %; por ende, lo que interesa recuperar aquí es la capacidad previa de los sectores más conservadores para poner en el centro de la escena el problema de seguridad, realizar una acción colectiva en torno a la resolución de la misma en un marco de las opciones democráticas de (re)formulación de políticas públicas y, por último, motorizar a la mitad del electorado en torno a una orientación conservadora.

Esta situación no resulta llamativa, si se tiene en cuenta que, desde 1985 a 2011 hubo 14 proyectos de ley presentados en esa dirección y, especialmente, al momento de la presentación del pedido del plebiscito (2011), el 70 % de la población estaba de acuerdo con la propuesta de modificación penal, en parte dado a que la inseguridad era considerado el principal problema en la opinión pública, independientemente de la (in)trascendencia real del problema (Moras, 2015:256 y 261; Tenenbaum, 2011:143). Sin embargo, la estrategia de búsqueda de firmas fue más allá de las subculturas y estrategias habituales de las fracciones de los partidos tradicionales que la apoyaban, al escudarse en las organizaciones de víctimas de delito (especialmente la «Comisión para vivir en paz» en Montevideo), iglesias evangélicas y asociaciones de comercio y pequeñas empresas (especialmente en el interior).

Perú (2018 y 2019)

La seguridad es una percepción asociada a la estabilidad, el *status quo* del orden social; es por ello, que un elemento disruptivo, como la apertura de una sociedad al riesgo, la universalización y el cambio son siempre condiciones inherentes a un estado de situación percibido como «inseguro». A partir del año 2015, el éxodo venezolano comenzó a marchar sobre los países cercanos de la región, provocando un ingreso masivo de migrantes a Brasil a través del estado de Roraima, a Colombia por la ciudad de Cúcuta, a Perú por la de Tumbes, a Ecuador por Rumichaca y a Chile por la de Tacna.

Para el año 2018, alrededor de 500 000 venezolanos habían ingresado en el territorio peruano como inmigrantes, configurando el rol de un «otro nuevo» que ponía en ciernes la rutina del tiempo social de ese país y, obviamente, trastocando la sensación de seguridad. Según datos de Latinobarómetro, desde el año 2015 al año 2018, casi 40 % de los peruanos dice estar preocupados «todo el tiempo» ante la posibilidad de ser víctimas de un delito con violencia (y alrededor del 30 % lo piensa «algunas veces»); pero también, para el año 2018, el 72 % de los peruanos consideraba que la llegada de inmigrantes al país lo perjudicaba.⁴ Hacia el año 2019, según la encuestadora Comercio–Ipsos, en la ciudad de Lima el 54 % de los encuestados consideraba perniciosa la inmigración venezolana porque estimaban que «aumenta la delincuencia y las actividades delictivas».⁵

Este panorama fue el caldo de cultivo para que un sector conservador de la sociedad anatémice su inseguridad en la figura del inmigrante y, por ende, lo exprese a través de la acción colectiva. Durante el año 2018 y 2019, se dio un gran activismo en las redes sociales en torno a la búsqueda de la salida de los venezolanos de Perú por ser los activadores de la delincuencia e inseguridad. Pero también se configuraron acciones colectivas: durante el 2018 se produjo la colocación de pancartas que decían «Perú sin venezolanos. Basta» en los puentes viales de la ciudad de Lima;⁶ y, en el 2019, se llevaron a cabo diversas «Marchas contra la delincuencia extranjera» en barrios de Lima (febrero) o

4 Ver: Latinobarómetro (<http://www.latinobarometro.org/latOnline.jsp>). Consultado: 15/10/2019

5 Ver: *El Comercio*, 29/04/2019. «El 67 % de limeños no está de acuerdo con la inmigración venezolana al Perú», disponible en: <https://elcomercio.pe/lima/sucesos/67-limenos-acuerdo-inmigracion-venezolana-peru-noticia-630720-noticia/> Consultado el 15/10/2019.

6 Ver: 800 Noticias: <https://800noticias.com/xenofobia-asi-fue-una-protesta-en-el-peru-por-la-llegada-de-miles-de-venezolanos>

ciudades como Tacna (septiembre), con consignas como «fuera los venecos», «la casa se respeta» o «Maduro llevate tu basura».⁷

Conclusiones

«Tradicición, familia y propiedad» son sin lugar a dudas tres de los baluartes ideacionales que dan forma al pensamiento conservador, especialmente en América Latina, donde los valores religiosos, la tenencia de la tierra y el peso de las jerarquías han sido mojonos históricos difíciles de transformar. Por ende, no resultaría llamativo que un sector de la sociedad que se ve representado en estas consignas, al evaluar el presente y futuro bajo el halo del riesgo, del cambio, considere necesario movilizarse en pos de la defensa y primacía de estos valores, en pos de una retro-evolución.

En este escrito, nos hemos concentrado en torno a la propiedad como valor, pero es posible extender el panorama y argumento descrito a la reacción y activación ciudadana de corte conservadora durante el siglo XXI latinoamericano frente a los desafíos que proponen iniciativas como: el matrimonio igualitario, el aborto, la educación sexual integral, el boom de nuevos sectores dinamizadores de la economía, la ampliación de derechos a las minorías, entre tantos otros elementos que ponen en tensión el *status quo* sobre lo que es la tradición y la familia.

Ahora bien, aún resta responder «¿por qué grita esa gente?». Es decir, por qué durante las primeras dos décadas del siglo XXI, los sectores conservadores de derecha hicieron de la acción colectiva y la política contenciosa uno de sus resortes para hacerse oír en América Latina. El argumento que se sostuvo en este artículo señala que esto se debe a:

- 1) una reacción de una parte importante de la sociedad a las orientaciones de política pública de los gobiernos del «giro a la izquierda»; 2) para incidir y/o retrotraer la situación a un *status quo* ante donde primen una situación de jerarquías, privilegios y desigualdades imperantes; 3) en el marco de un debilitamiento de las organizaciones partidarias tradicionales (especialmente los de origen democrata cristianos) en las cuales los sectores conservadores hacían oír su voz; 3) y un

7 Ver: Tenemos Noticias, «“Fuera los venecos”: en una marcha peruano gritan mensajes de xenofobia contra venezolanos», disponible en: <https://tenemosnoticias.com/noticia/venecos-marcha-venezolanos-mensajes-899212/1639152> Consultado el 15/10/2019. Peru 21, «Peruanos protestan contra venezolanos durante manifestación en rechazo a Maduro», disponible en: <https://peru21.pe/lima/peruanos-protestan-venezolanos-manifestacion-rechazo-nicolas-maduro-fotos-457509-noticia/> Consultado el 15/10/2019

creciente aprendizaje en torno cómo incide y cuáles son los repertorios disponibles de la acción colectiva en democracia que deja de ser dominio exclusivo de los grupos de izquierda. (Murillo, 2019:117)

En este marco, los sectores de la sociedad de corte conservadora, junto a organizaciones de la sociedad civil del mismo tenor (iglesias, sectores rurales, grupos de clases medias y medias altas, entre tantos otros), ingresaron en la arena pública planteando abiertamente su descontento político.

En este marco, no resulta azaroso que las fuerzas de seguridad, que durante la década de 1980 y 1990 retornaron a los cuarteles, sean nuevos depositarios de este renovado grito que motoriza la porción conservadora de la sociedad, dando origen a nuevas fuerzas políticas de relevancia como Jair Bolsonaro en Brasil o Cabildo Abierto en Uruguay por mencionar algunos, pero también de apelación a las fuerzas de seguridad como la última *ratio* en contextos de convulsión política, como es el caso de la crisis Ecuatoriana, Chilena o Mexicana durante el 2019.⁸

En definitiva, el siglo XXI sudamericano no solo dio brillo y lustre a fuerzas políticas y sociales de izquierda con capacidad de gobernar y producir un cambio en las condiciones desiguales de la región, sino también dio lugar y herramientas a nuevas fuerzas políticas conservadoras que —aprovechando el repertorio disponible de acción colectiva desarrollado en el actual período democrático por la izquierda— plantearon su descontento a viva voz con esta «marea rosa» que ponía en tensión o entredicho sus privilegios, tradiciones, valores y propiedad.

Referencias bibliográficas

- Acosta, Alberto** (2009). *La maldición de la abundancia*. Comité Ecuménico de Proyectos.
- Amaral, Marina** (2016). Jabutimão sobe em árvore: como o MBL se tornou líder das manifestações pelo impeachment. En *Por qué gritamos golpe. Para entender o impeachment e a crise política no Brasil* (pp. 49–54). Boitempo.
- Amselle, Jean-Loup** (2010). *Rétrovolution: Essais sur les primitivismes contemporains*. Stock.
- Berri, Mateo; Pandolfi, Jimena**. (2018). Movimiento «No a la baja»: construcción estratégica de la identidad colectiva. *Revista de Ciencias Sociales* 31 (42), 37–56.
- Blee, Kathleen M.; Creasap, Kimberly A.** (2010). Conservative and right-wing movements. *Annual review of sociology* 36, 269–286.
- Bobbio, Norberto** (1994). *Derecha e Izquierda*. Taurus.

8 Ver: Americas Quarterly, «Latin America Risks Becoming the Land of Militarized Democracies», 24/10/2019, disponible en: <https://www.americasquarterly.org/content/latin-america-risks-becoming-land-militarized-democracies> Consultado el 25/10/2019.

- Burbiano de Lara, Felipe** (2009). Las luchas autonómicas de Guayaquil y Santa Cruz. Una perspectiva comparada. En Arceo, E. y Bustelo, E. (Comps). *Las condicionantes de la crisis en América Latina. Inserción internacional y modalidades de acumulación* (pp. 275–320). CLACSO.
- Cerruti, Pedro** (2009). Procesos emocionales y respuestas punitivas: acerca del activismo penal de las víctimas del delito. *Revista electrónica de psicología política* 6 (20), 15–25.
- Diani, Mario** (2015). Revisando el concepto de movimiento social. *Encrucijadas Revista Crítica de Ciencias Sociales* 9, 1–16.
- Galar, Santiago** (2017). Problematizar el problema. Apuntes para complejizar el abordaje de la inseguridad en la dimensión pública. *Papeles de Trabajo* 11 (19), 61–76.
- Garland, David** (2005). *La cultura del control*. Editorial Gedisa.
- Giddens, Anthony** (1994). *Más allá de la izquierda y la derecha*. Editorial Cátedra.
- Hayek, Friederich** (2007). *Camino de servidumbre*. Alianza Editorial.
- Hobsbawm, Eric** (1994). Identidad. *Revista Internacional de Filosofía Política* 3, 5–17.
- Iglesias, Esteban** (2008). Política y protesta. Visiones comparadas de la acción colectiva. En Fernández, A. y Lesgart, C. (Comps.) *La democracia en América latina. Partidos Políticos y Movimientos Sociales* (pp. 149–170). Homo Sapiens.
- Iglesias, Esteban** (2013). Kirchnerismo y sindicalismo peronista. La persistente desarticulación de un vínculo en un contexto de revitalización sindical. En Fernández, A. (Comp.), *Rasgos y perspectivas de la nueva izquierda en América del Sur. Partidos políticos y movimientos sociales* (pp. 57–80). Homo Sapiens.
- Jiménez, Juan Pablo** (2017). Equidad y sistema tributario en América Latina. *Nueva Sociedad* 272, 52–67.
- Kessler, Gabriel** (2010). El sentimiento de inseguridad y el temor al delito en Argentina. En Kessler G.; Svampa, M. y Gonzáles Bombal, I., *Reconfiguraciones del mundo popular. El Conurbano Bonaerense en la postconvertibilidad*. Prometeo.
- (2015). *Controversias sobre la desigualdad: Argentina, 2003–2013*. Fondo de Cultura Económica.
- Lucca, Juan Bautista; Benetti, Gabriela; Iglesias, Esteban** (2017). Partidos, Sindicatos y los Gobiernos del diálogo social en Argentina, Brasil y Uruguay en el siglo XXI. En *Itinerarios políticos contemporáneos en Argentina, Brasil, Chile y Uruguay* (pp. 91–111). EDUNR. Disponible en: <https://rephip.unr.edu.ar/handle/2133/8522>
- Lucca, Juan Bautista** (2012). ¿Por qué se mueve la gente en América Latina? *Revista Mexicana de Análisis Político y Administración Pública* 2, 139–148.
- Martin, Isaac William** (2013). *Rich people's movements: Grassroots campaigns to untax the one percent*. Oxford University Press.
- Mauro, Sesbastián, y Rossi, Federico** (2012). Entre la plaza y la Casa Rosada: diálogo y confrontación entre los movimientos sociales y el gobierno nacional. En Malamud, A.; De Luca, M. (Coords). *La política en tiempos de los Kirchner* (pp. 167–178). Eudeba.
- Mayorga, Fernando** (2018). *Antes y después del referendo. Política y democracia en el Estado Plurinacional*. Universidad Mayor de San Simón. Centro de Estudios Superiores.
- McVeigh, Rory** (2009). *The rise of the Ku Klux Klan: Right-wing movements and national politics*. University of Minnesota Press.
- Morás, Luis Eduardo** (2015) La violencia adolescente como excusa disciplinante: el plebiscito para reducir la edad de imputabilidad penal en Uruguay. *Derecho y Ciencias Sociales* 12, 254–271.
- Mouzo, Karina** (2012). Inseguridad y populismo penal. *URVIO Revista Latinoamericana de Estudios de Seguridad*. 11, 43–51.

- Murillo, María Victoria** (2019). Democracia, intereses y estatus en América Latina, *Nueva Sociedad*, 282, 110–120.
- Peixoto de Oliveira, Renata** (2019). *Semrevoluções. Os dilemas das democracias neoliberais andinas*. Appris.
- Pichardo, Nelson A.** (1997). New social movements: A critical review. *Annual review of sociology* 23 (1), 411–430.
- Retamozo, Martín; Di Bastiano, Rocío** (2017). Los movimientos sociales en Argentina. Ciclos de movilización durante los gobiernos de Néstor Kirchner y Cristina Fernández de Kirchner 2003–2015. *Cuadernos del CENDES* 35, 117–153.
- Rocca Rivarola, Dolores** (2019). Tres momentos de la movilización política reciente en Brasil (2013–2016). En *Política Brasileña en Español. De la crisis al impeachment* (pp. 25–41). EDUNER.
- Rojas, Cesar** (2015). *Conflictividad en Bolivia 2000–2014: ¿cómo revertir la normalización de la presión social?* Fiedrich Eber Stiftung.
- Romero, José Luis** (1970). *El pensamiento político de la derecha latinoamericana*. Paidós.
- Singer, André** (2018). *O lulismo em crise: umquebra-cabeça do período Dilma (2011–2016)*. Editora Companhia das Letras.
- Soler, Lorena; Giordano, Verónica; Saferstein, Ezequiel** (2018). Las derechas y sus raros peinados nuevos. *Apuntes de Investigación del CECYP* 1 (30). pp. s/n.
- Sousa, Jesse** (2018). *A elite do atraso*. Leya.
- Stoessel, Soledad** (2014). Giro a la izquierda en la América Latina del siglo XXI: Revisitando los debates académicos. *Polis (Santiago)* 13 (39), 123–149.
- Svampa, Maristella** (2005). *La sociedad excluyente: la Argentina bajo el signo del neoliberalismo*. Taurus.
- Tatagiba, Luciana; Galvão, Andreia** (2019). Las protestas en Brasil en época de crisis (2011–2016). *Opinião Pública* 25 (1), 63–96.
- Tenenbaum, Gabriel** (2011). La discusión legislativa de la edad de imputabilidad en los anales de la recuperación democrática. Cualquier semejanza con la actualidad NO es pura coincidencia. *Revista de Ciencias Sociales* 24 (28), 127–147.
- Traverso, Enzo** (2018). *Las nuevas caras de la derecha: conversaciones con RégisMeyran*. Siglo Veintiuno.
- VonBeyme, Klaus** (1985). El conservadurismo. *Revista de estudios políticos* 43, 7–44.